



Francisco Simón Francisco
Auxiliar de Investigación

In-política migratoria: crisis institucional y contradicciones en la gestión de Jimmy Morales

Las dinámicas recientes de la migración guatemalteca son un indicador del grado de malestar y de insatisfacción de algunos guatemaltecos que en el actual período gubernamental no encontraron salud, educación y trabajo, y optaron por marcharse justo en una de las más álgidas coyunturas anti migratorias en Estados Unidos y México, situación que contrasta con el peor momento en la formulación de gestiones y políticas migratorias, que además de inoperantes son insuficientes e incoherentes con las verdaderas necesidades de atención desde, en, por y hacia el país. Por eso el término *in-política*, que para nosotros significa *hacer las cosas en sentido opuesto* a las necesidades de la población y en función de las demandas del país de destino.

Los principales organismos de gobierno en temas migratorios: cancillería, gobernación y presidencia, han sido tres de los peores en la historia institucional de Guatemala. La primera contradicción del presidente Jimmy Morales fue aceptar que agentes del FBI (en inglés, *Federal Bureau of Investigation*) realicen trabajo de inteligencia para dismantelar las redes del coyotaje, debido a que está demostrado que el 65% de los inmigrantes guatemaltecos que están en Estados Unidos llegaron contratando los servicios de éstos, de acuerdo con las encuestas de OIM, 2016. Otra de las contradicciones del gobierno ha sido la de ofrecer militarizar la frontera de Guatemala con México para impedir el paso de transmigrantes de

otros países y de Guatemala, situación que atenta contra los principios y enfoque de derechos humanos de la Convención de 1990, relativa a la protección de los migrantes, convención que entró en vigencia con la ratificación del Estado de Guatemala en el año 2003.

La lista de desaciertos es larga, y las contradicciones abundantes, una más es el lanzamiento e implementación del plan “Gobernanza” lanzado por el ministro de Gobernación, quien ha ordenado a la Policía Nacional Civil -PNC- detener y a Dirección General de Migración -DGM- deportar a cientos de centroamericanos que se encuentren en las carreteras del país, ignorando o no importando la existencia del CA4, acuerdo que permite la libre movilidad de los ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala por estos países. Además, procede a la expulsión de transmigrantes haitianos sin mediar procesos de garantía para acceder a solicitudes de refugio, deportándolos sin brindarles esa posibilidad. Todo lo anterior se hace con el fin último de mandar señales a Washington y demostrar que Guatemala está haciendo el trabajo de impedir los flujos migratorios hacia el Norte de América.

El más grave error, de la también larga lista de desaciertos en política exterior, fue sin duda el ofrecimiento al gobierno estadounidense de convertir a Guatemala en un tercer país seguro, condición que demanda la posibilidad de ofrecer seguridad ciudadana, humana y oportunidades de empleo, acceso a servicios de salud y educación a grupos de transmigrantes (incluyendo niños, niñas y adolescentes no acompañados) que solicitarán asilo o refugio a Estados Unidos, y que supondría además contar con instituciones y espacios adecuados para garantizar el enfoque de derechos humanos y la atención de calidad por un tiempo indeterminado.